



Emisor: secretaria@certificacion.cgpe.es

Destinatario: conandaluz@procuradores.info

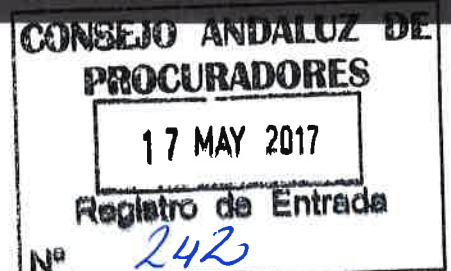
Destinatario del mensaje: conandaluz@procuradores.info;

Estado: Leído

Fecha de envío: 17/05/2017 14:08:06

Asunto: RE: acuerdo adoptado por el Pleno del Consejo Andaluz de Procuradores

Contenido:



El Comité Ejecutivo del Consejo General de los Procuradores de los Tribunales, en sesión celebrada el día 12 de mayo de 2017, dada cuenta de la consulta formulada por el Iltr. Colegio de Procuradores de Almería, a la que se ha adherido el Consejo Andaluz de Procuradores por acuerdo plenario del mismo, por unanimidad adoptó el siguiente:

ACUERDO

“Dar traslado a ambas Corporaciones del informe elaborado por el Asesor de este Consejo General, D. Ramón Trillo, mediante el que se efectúa un análisis de lo dispuesto en los artículos 29 y 34 del Real Decreto 1281/2002, de 5 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales de España”.

Lo que por indicación del Presidente traslado a usted para su conocimiento y efectos oportunos, acompañado del informe al que se hace referencia en el cuerpo de la presente certificación de acuerdo.

Madrid, 17 de mayo de 2017

El Secretario
José Manuel Villasante García

EXCMA. SRA. PRESIDENTA DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE PROCURADORES.-

De: Gabinete Presidencia - Consejo General Procuradores de España Enviado el: martes, 9 de mayo de 2017 18:13 Para: Departamento de Secretaria CGPE <secretaria@cgpe.es> Asunto: RV: acuerdo adoptado por el Pleno del Consejo Andaluz de Procuradores

De: CONSEJO ANDALUZ PROCURADORES GRANADA [mailto:conandaluz@procuradores.info] Enviado el: martes, 09 de mayo de 2017 14:00 Para: Presidencia del Consejo de Procuradores <presidente@cgpe.es>; Gabinete Presidencia - Consejo General Procuradores de España <gabinete.presidencia@cgpe.es> Asunto: RV: acuerdo adoptado por el Pleno del Consejo Andaluz de Procuradores

Buenas tardes:

Como continuación del correo electrónico remitido ayer lunes, 8 de mayo, para su mayor clarificación se acompaña la propuesta realizada por la Ilma. Sra. Decana del Colegio de Procuradores de Almería sobre la que se ha acordado la adhesión por este Consejo.

Un saludo.

Secretaría del Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores de los Tribunales.
Avda. de la Constitución, 22. Pasaje Arrayanes, local 5
18012- GRANADA. Teléfono: 958.2808.28/Fax:958.281850

Protección de datos: le informamos que los datos personales que puedan figurar en esta comunicación han sido facilitados voluntariamente por usted o provienen de los ficheros creados por Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores de los Tribunales, con la finalidad de poder gestionar nuestros servicios e informarle de los mismos.

En cualquier momento usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a Avenida Constitución, 22, Paraje Arrayanes, Local 5, 18012 Granada.
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 21 de la Ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, si usted no desea recibir más información sobre nuestros servicios, puede darse de baja en la siguiente dirección de correo electrónico: conandaluz@procuradores.info

De: CONSEJO ANDALUZ PROCURADORES GRANADA

[mailto:conandaluz@procuradores.info] Enviado el: lunes, 08 de mayo de 2017 10:44
Para: presidente@cgpe.es; Gabinete Presidencia - Consejo General Procuradores de España (gabinete.presidencia@cgpe.es)
Asunto: acuerdo adoptado por el Pleno del Consejo Andaluz de Procuradores

Buenos días:

Por medio del presente, se remite certificación del acuerdo adoptado por el Pleno del Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores de los Tribunales, en sesión celebrada el día 17 de marzo de 2017, rogando su traslado al Sr. Presidente del Consejo General de Procuradores.

Un saludo.

Secretaría del Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores de los Tribunales.
Avda. de la Constitución, 22. Pasaje Arrayanes, local 5
18012- GRANADA. Teléfono: 958.2808.28/Fax:958.281850

Protección de datos: le informamos que los datos personales que puedan figurar en esta comunicación han sido facilitados voluntariamente por usted o provienen de los ficheros creados por Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores de los Tribunales, con la finalidad de poder gestionar nuestros servicios e informarle de los mismos.

En cualquier momento usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a Avenida Constitución, 22, Paraje Arrayanes, Local 5, 18012 Granada.
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 21 de la Ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, si usted no desea recibir más información sobre nuestros servicios, puede darse de baja en la siguiente dirección de correo electrónico: conandaluz@procuradores.info

Libre de virus. www.avast.com

Archivos adjuntos:

- [procurador-sustituto.pdf](#) (511,50 KB)

Si considera que esto es un error o tiene cualquier duda sobre la seguridad del proceso, puede ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico soporte.cde@cpge.es o del telefono 910 60 25 58.

***** ADVERTENCIA LEGAL *****

Este mensaje va dirigido, de manera exclusiva, a su destinatario y puede contener información confidencial y sujeta al secreto profesional, cuya divulgación no está permitida por la ley. En caso de haber recibido este mensaje por error, le rogamos que, de forma inmediata, nos lo comunique mediante correo electrónico remitido a nuestra atención y proceda a su eliminación, así como a la de cualquier documento adjunto al mismo. Asimismo, le comunicamos que la distribución, copia o utilización de este mensaje, o de cualquier documento adjunto al mismo, cualquiera que fuera su finalidad, están prohibidas por la ley.

INFORME SOBRE CONSULTAS FORMULADAS POR EL ILUSTRE COLEGIO PROVINCIAL DE PROCURADORES DE ALMERÍA

La Decana del Colegio de Procuradores de Almería se dirige al Presidente del Consejo General, solicitando que por éste le sean informadas dos consultas.

La **PRIMERA** se formula en los siguientes términos:
“Interpretación del artículo 34 (capítulo IV) del actual Estatuto General de Procuradores, respecto a los Derechos y Deberes de los Procuradores sobre el ARANCEL. Y concretamente sobre el apartado 2.

CAPÍTULO IV.

Deberes y derechos de los Procuradores

Artículo 34. Arancel :

- 1. Los Procuradores en su ejercicio profesional percibirán los derechos que fijen las disposiciones arancelarias vigentes.*
- 2. Las Juntas de Gobierno podrán exigir a sus colegiados que acrediten el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior, incluso con exhibición de las facturas de suplidos y derechos y su reflejo contable.*

¿De qué forma, y hasta que límite puede la Junta de Gobierno solicitar la exhibición de estas facturas? “

En respuesta a ella cabe observar que la potestad de la que el artículo 34-2 del Estatuto General dota a los Colegios deriva de una doble consideración jurídica, que es la que debe de fijar los términos de su aplicación conforme a Derecho.

Por una parte, en efecto, lo dispuesto en el precepto es consecuencia de la situación de sujeción especial al Colegio en la que se hallan los Colegiados en lo que se refiere a las facetas de interés público insertas en su ejercicio profesional, facetas

en las que este ejercicio está sometido a rigurosas normas en cuanto a sus contenidos, rigurosidad que el ordenamiento ha extendido también a un aspecto en principio tan estrictamente contractual como es el de la retribución del servicio, que sin embargo ha sustraído en cuanto a la fijación de su cuantía a la libre voluntad de los contratantes para integrarla en un sistema de arancel, que *“regula los derechos devengados por los procuradores en toda clase de asuntos judiciales y ante las Administraciones Públicas ”* y en el que el único ámbito de disponibilidad que se reserva a los interesados es el de *“un incremento o de una disminución de hasta 12 puntos porcentuales, cuando así lo acuerde expresamente el procurador con su representado para la determinación de los honorarios correspondientes a su actuación profesional ”* (artículos 2 y 3 del Real Decreto 1373/2003).

Por otra parte, una vez establecido el sistema arancelario, la vigilancia de su cumplimiento se ha encomendado a la propia organización colegial, en una típica manifestación de las explícitas funciones públicas que a ésta se le otorgan, a pesar de su básica naturaleza de corporación constituida para la protección y defensa de los intereses profesionales de los propios colegiados.

El ejercicio de esta función pública se ha hecho efectiva integrando el supuesto dentro del reconocimiento genérico que la Ley ha otorgado a los Colegios Profesionales de una característica potestad pública sobre los Colegiados, cual es la potestad disciplinaria (artículo 5-i de la Ley de Colegios Profesionales), que para el supuesto que se examina se hace vigente en la tipificación descrita en el artículo 65-I del Estatuto General, que describe como infracción muy grave: *“La no aplicación de los disposiciones arancelarias sobre devengo de derechos en cualquier actuación profesional por cuenta ajena ”*.

Por lo tanto, el ejercicio por los Colegios de Procuradores de su función de vigilancia en orden a que sus profesionales facturen sus servicios dentro de los límites y conceptos definidos en el Arancel, ha de estar sometido a los

principios, técnicas y limitaciones propias del ejercicio de la potestad sancionadora por parte de las Administraciones Públicas, por lo que sin perjuicio de las instrucciones y advertencias genéricas que los Colegios pueden dirigir al conjunto de los Colegiados en recordatorio de su deber de ajustarse al Arancel, sin embargo, cuando se trate de perseguir eventuales incumplimientos de concretos Procuradores, habrá de acudir a un procedimiento con todas las garantías propias de los expedientes sancionadores de naturaleza disciplinaria, pues la consecuencia final de la actividad instructora habrá de asegurar que si a la postre los hechos infractores quedan acreditados, la sanción a imponer no sufra la objeción determinante de nulidad de que en el expediente se haya incurrido en indefensión del interesado.

Éste es el sentido que viene a expresar el artículo 69 del Estatuto General, cuando remite la sustanciación del expediente a las disposiciones contenidas en el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos de la Administración del Estado, aprobado por Real Decreto 33/1986 y por eso, con apoyo en este cuerpo normativo, la forma y momento en los que se pueda considerar que existe habilitación para que las Juntas de Gobierno hagan efectiva la potestad de exigir a sus colegiados que acrediten que en su ejercicio profesional perciben los derechos que fijan las disposiciones arancelarias vigentes, incluso con exhibición de las facturas de suplidos y derechos y su reflejo contable (artículo 34-2 del Estatuto General), es el de la llamada *“información reservada”* que el artículo 28 del citado Real Decreto le autoriza a practicar al órgano competente para incoar el procedimiento disciplinario, competencia que el Estatuto otorga a propias Juntas de Gobierno en su artículo 60, *“información reservada”* que se corresponde conceptualmente con las llamadas *“informes o actuaciones previas”* para determinar con la mayor determinación posible los hechos susceptibles de motivar la incoación de expediente, que se regulan en el artículo 55 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común.

A juicio de este informante, es ese concepto, el de una información dirigida a acreditar si se está en el caso de una eventual procedencia de que sea incoado un expediente disciplinario a uno o más colegiados por incumplimiento de la obligación que se les impone en el artículo 34-1 del Estatuto General, la que cubre jurídicamente la activación por las Juntas de Gobierno de la potestad que les reconoce el apartado 2 del mismo artículo y todo ello con una clara libertad de apreciación por parte de la respectiva Junta de la oportunidad de decidir una actuación que constituye un requerimiento que nada prejuzga.

Fijado el concepto, en cuanto al interrogante de hasta que límite pueden las Juntas de Gobierno solicitar la exhibición de estas facturas, la respuesta ha de tomar como referencia el instituto de la prescripción, que el artículo 73-1 del Estatuto General fija en tres años para las infracciones graves, por lo que solamente podrá requerirse al colegiado la exhibición de aquellas facturas que se hayan emitido dentro del término de los tres años anteriores puesto que, como queda indicado, la coacción colegial se inserta dentro del sistema disciplinario y la eficacia jurídica de éste se extingue con la prescripción.

La **SEGUNDA** cuestión se formula en los siguientes términos: *“Respecto al artículo 29, sobre las SUSTITUCIONES. Precisamos informe de la interpretación de su enunciado :”SUSTITUCIÓN DEL PROCURADOR EN DETERMINADAS ACTUACIONES “. Este Colegio requiere al Consejo General, para que le explique con la máxima claridad en que marco legal se puede interpretar el enunciado: DETERMINADAS ACTUACIONES. Si este concepto abarca todas las actuaciones en que un Procurador puede pedir que le sustituya otro compañero o varios, para un mismo o diferentes mandantes, de forma generalizada y en cuantas demandas y comparecencias personales requieran su intervención. Si este enunciado del artículo, interpreta ese Consejo General que da cobertura legal a la práctica de Procuradores que absolutamente todas las comparecencias y actuaciones procesales personales las*

realizan sistemáticamente a través de otros procuradores, incluso lo tienen establecido contractualmente. “

Se plantea en esta cuestión la interpretación y alcance que deba de darse a los artículos 543-4 de la LOPJ y al 29 del Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales.

El primero de ellos, escueto, se limita a reconocer la posibilidad de la sustitución, sin matización explícita alguna: *“En el ejercicio de su profesión los procuradores podrán ser sustituidos por otro procurador”*.

Más detallado, el precepto reglamentario nos dice que *“Los procuradores podrán ser sustituidos, en el ejercicio de su profesión, por otro procurador con la simple aceptación del sustituto, manifestada en la asistencia a las diligencias y actuaciones, en la firma de escritos o en la formalización del acto profesional de que se trate. Para que opere la sustitución entre Procuradores no es necesario que el Procurador sustituto se encuentre facultado con el apoderamiento del procurador sustituido ni que el procurador sustituido acredite la necesidad de la sustitución. En todo caso, las sustituciones de Procuradores se regirán por las normas de contrato de mandato contempladas en el Código Civil y la Ley Orgánica del Poder Judicial “*.

El interrogante central de la cuestión es de si estos preceptos hacen jurídicamente viable la práctica de que un procurador realice todas las comparecencias y actuaciones procesales personales sirviéndose de otros procuradores ya que, a diferencia del supuesto de la sustitución por un Oficial Habilitado, que está sometida a estrictas limitaciones en el ejercicio de la actividad de sustituir al procurador habilitante, al procurador sustituto no se le fijan de forma explícita, ni en el texto legal ni en el estatutario, limitación alguna a la posibilidad de sustituir a un compañero de profesión, por lo que la eventual fijación de unos límites habría que buscarla en la naturaleza de la institución jurídica que vincula al Procurador con su cliente, que no es otra que un *“contrato de mandato, en su variedad de mandato representativo: artículos 1718 y 1719*

del Código Civil “ (STS 7-abril-2003), un mandato cuyo destino es activarse en el ámbito del proceso, pero que no obstante no excluye la nota causal de estar constituido por una relación de confianza, característica del contrato civil que se evoca, relación de confianza en el sentido de que el poderdante otorga su poder a un profesional determinado porque confía en que desarrollará con solvencia la gestión procesal que le ha encargado y que por eso, en principio, ha de considerarse obligado que la prestación se lleve a cabo personalmente por quien ha sido apoderado.

Se cruza, sin embargo, con este inicial principio, que tanto el Código Civil como el Estatuto General admiten la figura de la sustitución sin la intervención de la voluntad del mandante, sustitución que incluso el citado artículo 29 trata de facilitar, evitando cualquier exigencia formal, pues considera suficiente para su eficacia la tacita aceptación consistente en el hecho mismo de que el sustituto actúe en los actos procesales de que se trate, sin que siquiera sea preciso que medie ni la constancia de un acto previo de mandato ni que se acredite la necesidad de sustitución.

Ahora bien, son paradójicamente estas mismas facilidades que se conceden reglamentariamente para que un procurador sea sustituido por otro no apoderado por el litigante, las que llaman a considerar que la “*necesidad*” que no es obligado acreditar, pero cuya obligada concurrencia se sobreentiende en la propia norma que excusa de su acreditación, pueda entenderse que autorice el fraude a la confianza del poderdante de “suplantar “ plenamente al titular del apoderamiento, como con vocablo bien expresivo se nos dice en una sentencia de la sección 2ª de la Audiencia Provincial de Huelva de 14 de enero de 2013:

“Es obvio que la actora está actuando a distancia, ya que en el momento en que deben realizarse actuaciones que exigen presencia personal, se acude a otro letrado y, lo que es más relevante, a un procurador afincado en este partido que no aparece apoderado, y que no encabeza los escritos. Tengo

motivos para considerar que la parte no se ha personado ante la Sala, y dar con ello por incumplida esa exigencia formal, y de modo insubsanable, porque cuando se ha pedido que se sane la carencia observada, el representante procesal tampoco ha hecho acto de presencia (eso es lo que significa comparecer) ni ha presentado por sí el escrito. Desaparece así la esencia misma de la función del procurador, que es la de servir de enlace personal entre la parte poderdante, su letrado y el órgano judicial, como elemento de unión imprescindible que fiscaliza los plazos, controla la tramitación, vigila los intereses formales del cliente en ese terreno y articula el proceso; se suprime la relación de confianza entre representante y representado; se subvierte el régimen de responsabilidades por error profesional; se impide una ágil y adecuada relación entre el órgano judicial y la parte; se pierde la fluida disponibilidad entre ambos. No creo que la posibilidad estatutaria o colegial de sustituirse los Procuradores entre sí dé base para esta plena suplantación, ya que no se trata de que de modo ocasional, y por cierto motivo, un procurador actúe por otro, sino que desde el origen del litigio es patente que no podrá actuar por sí el apoderado de la parte, y que por ello encomienda la llevanza del pleito en su actuación ante los órganos judiciales a uno distinto. Y en este caso con el añadido de que la procuradora apoderada, ha delegado firma, ya que en todos los escritos no aparece ni una sola que sea original, sino copia escaneada de la misma, como la que ya venía estampada en la demanda. Pues bien, una cosa es que se haya suprimido la limitación geográfica que obligaba a cada causídico a actuar en un partido, y otra que se haya aprovechado esa regla para defraudar la función misma que corresponde a ese cuerpo jurídico, degradando su intervención hasta minimizar su importancia, además de haber abierto un camino para incurrir en competencia desleal, aspecto este meramente colegial que no me corresponde valorar pero para cuyo conocimiento creo que debo remitir copia de esta sentencia al Ilustre Colegio de Procuradores de Huelva. “

Esta sentencia se expresa, sin duda, en un caso extremo, pero tiene el valor de que además de afrontar la incoherencia

de un representante procesal que nunca se hace presente en los actos procesales presenciales, pone también implícitamente de manifiesto que el problema, de entrada, no ha de confiarse a que se resuelva directamente por los órganos judiciales, ya que éstos aceptarán con normalidad la actuación del sustituto en razón de los artículos citados de la Ley Orgánica y del Estatuto, sin preguntarse sobre sí la sustitución afecta a un acto procesal aislado o a un conjunto o a todos ellos, por lo que la actividad de evitar conductas como la descrita entiendo que habrán de asumirla los Colegios, adoptando una posición general de rechazo y con apertura, incluso, de diligencias a los Procuradores que se desempeñen en la forma indicada y, desde luego, atendiendo a que, en el supuesto de que se vaya a una reforma estatutaria, se promueva una redacción del artículo 29 del Estatuto en la que se destaque la naturaleza de mera necesidad circunstancial como causa lícita de las sustituciones entre Procuradores.

Finalmente señalar que la infracción que cabía indicar como aplicable al supuesto sobre el que se consulta probablemente sería, en una perspectiva de descripción objetiva, la tipificada en el artículo 65-k del Estatuto General: *“No acudir a los órganos jurisdiccionales ni a los servicios comunes de notificaciones, reiteradamente y sin causa justificada”*, norma estatutaria que se complementa el art. 11 del Código Deontológico, en el que se establece que *“El procurador estará obligado a acudir a los juzgados y tribunales ante los que ejerza la profesión, a las salas de notificaciones y servicios comunes, durante el periodo hábil de actuaciones, para la realización de los actos de comunicaciones y demás actuaciones profesionales correspondientes”*.

Este dato objetivo, del incumplimiento del deber de asistencia a los órganos jurisdiccionales, tendría a su vez como soporte subjetivo de infracción el incumplimiento del deber descrito en el art. 4 del propio Código Deontológico: *“Todo procurador deberá actuar con la debida competencia profesional y dedicación al servicio que se haya comprometido a realizar. No deberá aceptar mayor número de encargos que*

aquellos que pueda atender debidamente o que supere los medios de que disponga”.

Este es mi parecer, que doy en Madrid, en abril de
2017

Fdo. Ramón Trillo